

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, siete (07) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Magistrado Sustanciador: **EDGAR ENRIQUE BERNAL JÁUREGUI**

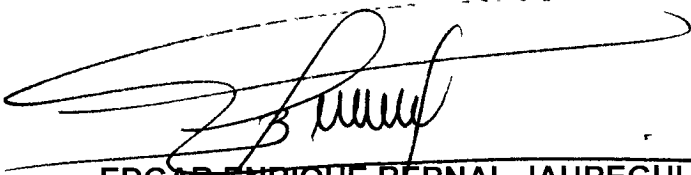
RADICADO:	54-001-23-33-000-2016-00282-00
ACCIONANTE:	JARDINES DE SAN JOSE S A S
DEMANDADO:	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO


Visto el informe secretarial que antecede a la actuación, se aprecia que el Arquitecto PABLO COHEN VIVARES, quien funge como Representante legal de AVALUARQ (Lonja Avaluadora de Arquitectos Norte de Santander) junto con memorial radicado el día 10 de noviembre de 2017 (fls 338 a 403 del expediente), allega dictamen pericial sobre los avalúos comerciales de los predios Jardines Cementerio, lote 1 y lote 2.

Con relación a ello, el artículo 218 del CPACA, establece que la prueba pericial se regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil, entiéndase Código General del Proceso, salvo en lo que de manera expresa se disponga por este Código sobre la materia; de tal manera que, ante la ausencia de regulación en el CPACA acerca del traslado cuando una de las partes solicita dictamen pericial, en aplicación de lo consagrado en el artículo 228 del CGP¹, en procura de la celeridad y mayor garantía del derecho de defensa y contradicción, se dispone correr traslado del dictamen pericial en mención a las partes por el plazo de tres (3) días, a fin de que se solicite complementación o aclaración si a ello hubiere lugar.

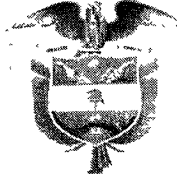
Una vez cumplido lo anterior, ingresar inmediatamente el expediente al Despacho para proveer sobre la siguiente etapa procesal.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI
Magistrado.-

 KEMB
Nº 208
Dic. 11/2017

¹ La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. Estas deberán realizarse dentro del término de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga en conocimiento

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**

San José de Cúcuta, Cinco (05) de Diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017)

Magistrado Sustanciador: Dr. Edgar Enrique Bernal Jáuregui

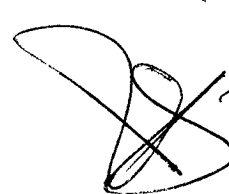
RADICADO: No. 54-001-23-33-000-2015-00378-00
ACCIONANTE: PALMAS CATATUMBO S.A.
DEMANDADO: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA – EJERCITO NACIONAL –
POLICIA NACIONAL – MUNICIPIO DE TIBU – PRESIDENCIA DE
LA REPUBLICA – MINISTERIO DE AGRICULTURA –
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.
ACCIÓN: REPARACION DIRECTA

Teniendo en cuenta el Oficio B-0528 visto a folio 1347 y 1348 del expediente, suscrito por el Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente de la Universidad Francisco de Paula Santander, se procede a DESIGNAR como perito en su especialidad ingeniería agrónoma al señor MARLON HANS RODRIGUEZ quien habrá de rendir el dictamen decretado en el numeral 2.6 en el auto de pruebas proferido en la audiencia inicial, tendiente a que se determinen los daños y perjuicios materiales sufridos por la Sociedad PALMAS CATATUMBO S.A. (Fol. 1322 a 1326). Por Secretaría CÍTESELE y DÉSELE la posesión del cargo en los términos del numeral 2 del artículo 236 del C.P.C.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI
Magistrado

X Estado
Nº 208
Dic. 11/2017





TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Magistrado Sustanciador: Dr. Edgar Enrique Bernal Jáuregui

RADICADO:	54-001-23-33-000-2017-00688-00
ACCIONANTE:	CLAUDIA MILENA ARGUELLO LANDAZABAL
DEMANDADO:	INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS
MEDIO DE CONTROL:	CONTRACTUAL

Seria del caso proceder a verificar el cumplimiento de los presupuestos formales y sustanciales legales que debe reunir la demanda de la referencia para efectos de ser admitida, sino se advirtiera que el conocimiento de la misma no corresponde a este Tribunal en primera instancia, sino en su lugar, al de los Juzgados Administrativos Orales del Circuito Judicial de Cúcuta, por lo cual procederán a exponerse, las razones de derecho que conllevan a tal conclusión.

1. ANTECEDENTES

La señora CLAUDIA MILENA ARGUELLO LANDAZABAL, actuando en nombre propio y en calidad de propietaria del establecimiento de comercio "Serviparqueo La Cordialidad", mediante apoderado, presenta demanda en contra del INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, solicitando la declaratoria de desequilibrio económico en los contratos 029-2012, 009-2013, 0023-2014, 0024-2015 y adicional 001-2015, por causas no imputables a la contratista, y se ordene cancelar los valores correspondientes de parqueaderos de los vehículos automotores y de grúa, ya identificados por la entidad demandada, y se relacionan en anexo.

2. CONSIDERACIONES

La importancia de estimar razonadamente la cuantía del proceso adquiere especial importancia para la definición de competencias entre los Juzgados y Tribunales Administrativos, en razón a que de ese razonamiento que debe hacer la parte demandante en el escrito de demanda, depende la determinación de la competencia. Al respecto, se considera que tal requisito de la demanda de estimar razonadamente la cuantía busca impedir que el demandante de forma caprichosa determine este factor y así pueda escoger a su arbitrio, el juez que a su juicio debe conocer el asunto en primera instancia.

La Ley 1437 de 2011 –CPACA- en sus artículos 152 y 155, establece la competencia de los Tribunales Administrativos y Jueces Administrativos en primera instancia, respectivamente, señalando para los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, lo siguiente:

"ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

"(.) 5 De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas

exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)

“ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

“(..) 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado, y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)”

A su vez, el artículo 157 ibídem, prevé:

“Competencia por razón de la cuantía Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos sean los únicos que se reclamen (...) Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor” (.) “La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.” (Se resalta)

De acuerdo con la normativa transcrita, la estimación de la cuantía para determinar la competencia del Tribunal Administrativo para asumir el conocimiento de la demanda, se establece conforme el valor de la pretensión mayor al momento de su presentación, esto es, la pretensión más alta debe exceder el valor de los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella y la estimación de perjuicios morales, a menos que éstos sean los únicos reclamados

Descendiendo al caso concreto, visto el acápite de pretensiones de la demanda y estimación de la cuantía (fls. 7-8), se observa que el apoderado de la parte demandante estima la cuantía en un valor total de \$2.049'999.120 más indexación hasta que se haga efectivo el pago, correspondiente a (i) valor de grúa de motos \$15'471.873, (ii) valor de parqueadero de motos \$1.360'443.682, (iii) valor de grúa de carros \$1'930.021, (iv) valor de parqueadero de carros \$172'153.364, (v) perjuicios materiales \$500'000.000, más indexación.

No obstante ello, para el Despacho es claro que el asunto de la referencia tiene su origen en los contratos estatales celebrados entre las partes para la contratación del servicio de parqueadero y traslado de vehículos en grúas, obrantes en folios 350 a 370 del expediente, en los cuales se estipuló como valor las siguientes sumas: (i) contrato 029-2012 de \$20'000.000, (ii) contrato 009-2013 de \$15'000.000, (iii) contrato 023-2014 de \$17'000.000, y el (iv) contrato 024-2015 de \$17'000.000

Verificado lo anterior, en el caso se advierte la existencia de una acumulación de pretensiones, debido a varios contratos de servicio suscritos y ejecutados en distintos

períodos, razón por la cual, el factor objetivo de la estimación razonada de la cuantía es el criterio para precisar la competencia en el caso.

En ese contexto, teniendo en cuenta el valor de los contratos antes enunciados, el Despacho encuentra que la cuantía que se tendrá en cuenta para determinar la competencia es la suma de \$69'000.000¹, no alcanzándose entonces a superar el valor de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2017², fecha de presentación de la demanda; en consecuencia, no se habilita la competencia para que esta Corporación asuma el conocimiento en primera instancia en el asunto de la referencia.

Finalmente, se advierte al no contar con la competencia legal para el conocimiento del presente asunto en primera instancia, no se revisará si la demanda se ajusta o no a las previsiones señaladas en el artículo 162 y siguientes del CPACA, verbigracia contabilización del plazo caducidad del medio de control, pues dicha labor corresponde al Juez que aprehenda el conocimiento de esta causa judicial.

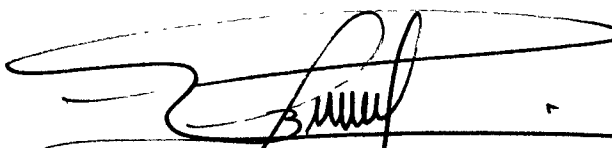
En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,


RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE COMPETENCIA por el factor cuantía, para conocer en primera instancia el proceso de la referencia, de acuerdo a las consideraciones que anteceden.

SEGUNDO: REMITIR el proceso de la referencia a la Oficina de Apoyo Judicial de Cúcuta, para que proceda a efectuar el reparto del mismo entre los Juzgados Administrativos Orales del Circuito Judicial de Cúcuta, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI
Magistrado.-

 *cc: tab
Nº 208
Drc. 11/2017*

¹ Valor que resulta de sumar el valor pactado de todos los contratos

² Para el año 2017 equivale a \$36'885 850 00

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**

San José de Cúcuta, siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Magistrado Sustanciador: Edgar Enrique Bernal Jáuregui

EXPEDIENTE:	54-001-23-33-000-2017-00691-00
DEMANDANTE:	CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS SAS
DEMANDADO:	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO


Efectuado el análisis para proveer la admisión de la demanda de la referencia, considera el Despacho que la misma cumple con los requisitos formales señalados en la Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, razón por la cual se dispone:

1. **ADMITIR** la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, impetrase a través de apoderado debidamente constituido, la sociedad CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS SAS en contra del MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, teniendo como actos administrativos demandados las Resoluciones 1973-16 de fecha 6 de diciembre de 2016 (fls. 38-39), 2028-16 del 29 de diciembre de 2016 (fls. 41-42), mediante las cuales se realiza liquidación oficial del impuesto de alumbrado público correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2016, y la Resolución 1759-17 del 13 de junio de 2017 (fls. 72 a 95), mediante la cual se resuelve el respectivo recurso de reconsideración.
2. **NOTIFICAR** por estado electrónico este proveído a la parte demandante, conforme a las previsiones del artículo 201 del CPACA, la cual deberá surtirse de igual manera a las direcciones de correo electrónico: colnotificacion@deloitte.com, carlos.mora@cenit-transporte.com, en virtud de lo dispuesto en el artículo 205 del CPACA.
3. De conformidad al artículo 171-4 ídem, **FÍJESE** la suma de ochenta mil pesos (\$80.000) como gastos ordinarios del proceso, que deberán ser consignados por la parte actora en la cuenta que al efecto tiene el Tribunal en el Banco Agrario de la ciudad, para lo cual se señala un término de diez (10) días contados a partir de la notificación del presente auto, con la prevención de lo señalado en el artículo 178 ibídem.
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CPACA, **NOTIFÍQUESE** personalmente la admisión de la demanda a la entidad demandada y al Ministerio Público, en los términos del artículo 199 del CPACA modificado por el artículo 612 del CGP.
5. Vencido el término señalado en la disposición anterior, **CÓRRASE** traslado de la demanda a la entidad demandada y al Ministerio Público por el término de treinta (30) días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del CPACA.


6. **PÓNGASE** de presente a la entidad demandada, la obligatoriedad de dar cumplimiento a lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 175 del CPACA, so pena de la consecuencia jurídica allí establecida.

7. **RECONÓZCASE** personería a los abogados Julián Moreno Pérez, Carlos Henry Rodríguez Salgado, Juan Carlos Vinasco Escarria y Andrea Ospina García, como apoderados de la parte actora, en los términos y para los efectos del memorial poder visto a folios 2-3 del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



EDGAR ENRIQUE BERNAL JÁUREGUI
Magistrado.-



x estado
Nº 208
Dic 11/2017 f



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)
Magistrado Sustanciador: Dr. EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI

Expediente:	54-001-23-33-000-2016-00375-00
Demandante:	Víctor Julio Santander Peñaranda
Demandado:	UGPP
Medio de control:	EJECUTIVO

Entra el Despacho a resolver el recurso de reposición interpuesto por parte del apoderado de la parte demandante, en contra del auto proferido el día 27 de septiembre de 2017.

I. ANTECEDENTES.

En el auto recurrido se dispuso, declarar la falta de competencia, por el factor cuantía, para conocer en primera instancia el proceso de la referencia, y remitir el proceso a la Oficina de Apoyo Judicial de Cúcuta, para que proceda a efectuar el reparto del mismo entre los Juzgados Administrativos Orales del Circuito Judicial de Cúcuta, para lo de su cargo.

Contra la anterior providencia, el apoderado del señor VÍCTOR JULIO SANTANDER PEÑARANDA, presentó recurso de reposición (fls. 116 a 120), con el objeto de que se reponga la decisión, al considerar, por una parte, que sin explicación alguna la solicitud de la ejecución de las sentencias fueran sometidas a reparto, cuando iban dirigidas al Despacho por ser el competente para su trámite, en virtud del factor de conexidad y otros criterios que pasa a exponer.

De otro lado, sostiene que varios tribunales administrativos del país, incluida la máxima Corporación de la jurisdicción, siguen la tesis que en este trámite no es relevante el factor cuantía para efectos de determinar la competencia, ya que la intención del legislador para estos eventos fue designarla en el juez de conocimiento.

Trae a colación jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, C.P. William Hernández Gómez, providencia del 25 de julio de 2016, radicación 11001032500020140153400 (4935-2014), solicitando sea tomada en cuenta al desatar el recurso.

II. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER

Desde ya reitera el Despacho que, por la cuantía del negocio, no es procedente asumir el conocimiento del presente asunto, por ende, no se repondrá la decisión de remitir el expediente a la Oficina de Apoyo Judicial de Cúcuta, para que proceda a efectuar el reparto del mismo entre los Juzgados Administrativos Orales del Circuito Judicial de Cúcuta.

En primera medida, es de precisar que la figura de ejecución de sentencias de que trata el artículo 298 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA–, tiene aplicación para los procesos iniciados a partir del 2 de julio de 2012, una vez entrada en vigencia dicha

Ley, y el presente asunto, se solicita librar mandamiento con base en la sentencia de fecha 23 de junio de 2011 expedida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y del 9 de octubre de 2014 emanada del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 54001-23-31-000-2010-00091-01, tramitado en vigencia del régimen anterior (Decreto 01 de 1984).

En conclusión, la competencia para la ejecución de sentencias en los términos referidos, debe aplicarse únicamente a las dictadas en el sistema oral previsto en la Ley 1437 de 2011 que se hallen ejecutoriadas, conforme a la regla prevista en el numeral 9 del artículo 156 del CPACA, que le asigna tal atribución al juez que profirió la providencia, lo cual no se presenta en el caso en cuestión.

Adicionalmente, como se puede advertir del plenario, la demanda fue interpuesta el 26 de agosto de 2016, es decir, en vigencia de la Ley 1437 de 2011 –CPACA-, de modo que es este ordenamiento el que rige el proceso ejecutivo promovido y, por consiguiente, el que se debe aplicar en lo atinente a la competencia por el factor objetivo de la cuantía.

Ciertamente el artículo 152 de CPACA, al determinar la competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia, contempló en el numeral 7 el conocimiento de los procesos ejecutivos de la siguiente manera: “(...) 7. De los procesos ejecutivos, cuya cuantía exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (...)”

A su vez, el numeral 9 del artículo 156 ibídem, en materia de competencia por el factor territorial, prevé que *“En las ejecuciones de las condenas impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo o de las obligaciones contenidas en una conciliación aprobada por esta jurisdicción, será competente el juez que profirió la sentencia respectiva”*.

De acuerdo a lo preceptuado en artículo 29 del CGP¹, cuando coexistan reglas de competencia, el factor cuantía prevalece sobre el territorial.

Sobre este tema, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en pronunciamiento del 7 de octubre de 2014, con ponencia del Magistrado Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicado expediente 47001-23-33-000-2013-00224-01 (50006), dejó muy claro que las normas que consagran el factor objetivo y el factor territorial deben ser aplicadas de manera armónica y sistemática, para determinar el juez competente de los asuntos de ejecución de sentencias judiciales:

“De la interpretación taxativa de la norma anterior, se puede llegar a pensar que existe una contradicción entre las normas de competencia previamente citadas, pues la norma que otorga competencia en razón del territorio, pareciera indicar que el juez competente es el mismo que profirió la condena, independientemente de cual sea la cuantía del asunto, siendo indiferente entonces analizar el factor objetivo

Sin embargo, encuentra esta Corporación que es necesario armonizar las normas ya referenciadas, y entender que cuando el artículo 156 numeral 9 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dice que será competente el mismo juez que profirió la providencia respectiva, dicha norma se ve limitada por el encabezado de la misma, razón por la cual tal imperativa se circunscribe a determinar solamente la competencia en razón del territorio, por tal motivo se debe entender entonces que no hace referencia al juez propiamente dicho, sino al distrito judicial donde se debe interponer la demanda ejecutiva

¹ “ARTÍCULO 29. PRELACIÓN DE COMPETENCIA. Es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes. Las reglas de competencia por razón del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor”

Siendo así, el factor objetivo resulta indispensable para determinar el juez competente, pues solo al determinar la cuantía es posible identificar el funcionario del distrito judicial que le corresponde conocer del proceso ejecutivo, siendo necesario entonces aplicar las dos normas anteriormente mencionadas, que consagran el factor objetivo y el factor territorial de manera armónica y sistemática, para dar con el juez competente cuando el título ejecutivo consiste en una sentencia judicial” (Se resalta)

En ese orden de ideas, como quiera que el juez que profirió las sentencias –factor territorial– dictadas en vigencia del Decreto 01 de 1984 o sistema escritural, sobre las cuales la parte demandante pretende se libre mandamiento ejecutivo, ya no hacen parte del circuito judicial oral, para la ejecución de tales sentencias, se debe acudir al artículo 29 del CGP, conforme al cual, la competencia por razón del territorio -juez que dictó la sentencia- se subordina a la establecida por materia y valor, por consiguiente, en el caso de demandas ejecutivas de sentencias dictadas en el sistema escritural la regla de competencia será la cuantía.

Por lo tanto, para que un proceso ejecutivo sea de conocimiento de esta Corporación, la obligación deberá superar el monto de 1500 SMMLV, que equivalen para el año 2016, fecha de presentación de la demanda ejecutiva, a \$1.034'182.500.00, de lo contrario, su conocimiento corresponderá a los Jueces Administrativos, con fundamento en el artículo 155 numeral 7 del CPACA.

Así mismo, atendiendo que la pretensión en favor de la parte ejecutante, está relacionada con la obligación derivada de los intereses moratorios causados a partir del 15 de diciembre de 2014, fecha de ejecutoria de las sentencias, y hasta el 25 de noviembre de 2015, cuando se realizó el pago del retroactivo pensional, por valor de **\$80'060.000.00**, el Despacho concluye, un vez más y sin lugar a hesitación, que el presente asunto deberá remitirse por competencia, en razón al factor cuantía.

El anterior análisis resulta suficiente para confirmar la providencia recurrida.


En mérito de lo anteriormente expuesto, el Despacho 002 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

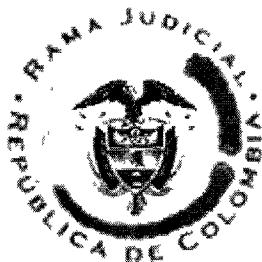
RESUELVE:

PRIMERO: NO REPONER la providencia proferida el día 27 de septiembre de 2017, de conformidad con lo expuesto en la presente decisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


EDGAR ENRIQUE BERNAL JÁUREGUI
MAGISTRADO.-

 x estado
Nº 208
Dic. 11/2017



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
San José de Cúcuta, siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)
Magistrado Ponente: Edgar Enrique Bernal Jáuregui

EXPEDIENTE:	54-001-23-33-000-2014-00391-01
DEMANDANTE:	CARLOS ALFREDO MENDEZ RAMIREZ
DEMANDADO:	DIAN
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

El doctor HERNANDO AYALA PEÑARANDA, Magistrado de la Corporación, en escrito que antecede a la actuación¹, manifiesta estar impedido para conocer del presente proceso, ya que considera se encuentra incurso en la causal establecida en el artículo 130 de la Ley 1437 de 2011 –CPACA- y numeral 2 del artículo 141 de la Ley 1564 de 2012 –CGP-, toda vez, que durante su desempeño como Juez Segundo Administrativo Oral de Cúcuta, asumió el conocimiento del asunto en primera instancia y profirió los autos de inadmisión y admisión de la demanda, que convocó a audiencia inicial, y que declaró la falta de competencia proferido en el trámite de la audiencia inicial.

Para resolver se

CONSIDERA

Por remisión expresa que se encuentra establecida en el artículo 130 del CPACA, que dispone:

“ARTÍCULO 130. CAUSALES Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos ”

Y observando el artículo 141 numeral 2 del CGP, que es del siguiente tenor

*“Artículo 141. Causales de recusación
Son causales de recusación las siguientes
1 Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso

2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente.”(Negritas y cursiva fuera del texto)*

En el presente caso, una vez realizado el análisis de los argumentos planteados en esta oportunidad en contraste con la causal esgrimida, la Sala encuentra infundado el impedimento manifestado por el doctor HERNANDO AYALA PEÑARANDA, en tanto, se considera que las actuaciones adelantadas por éste cuando ejercía como juez de instancia en el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Cúcuta, no logran viciar su imparcialidad y objetividad de servidor público que pueda traducirse en alguna tergiversación de las actuaciones a realizar dentro del proceso ha futuro

¹ Folio 148 del expediente

Lo anterior, motivado en el hecho que las determinaciones proferidas bajo su tutela no tienen la entidad para afectar las resueltas, desarrollo o trámite del proceso, pues en ninguno de ellos realizó pronunciamiento alguno sobre el asunto sustancial o de fondo del litigio, ni comprometió en manera alguna su imparcialidad, sin que sea necesario por tanto separarlo del presente asunto

Así las cosas, se debe negar el impedimento materia de pronunciamiento toda vez que no se configura la casual correspondiente,

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala de Decisión Oral N° 002 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

RESUELVE

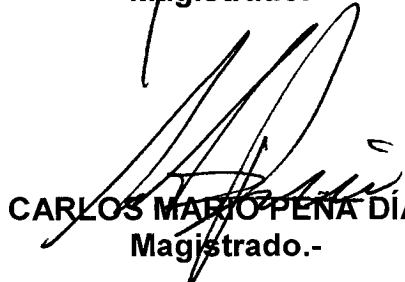
PRIMERO: DECLÁRESE INFUNDADO el impedimento manifestado por el Magistrado doctor HERNANDO AYALA PEÑARANDA, en el proceso de la referencia


SEGUNDO: EJECUTORIADA esta providencia, devuélvase el expediente al Despacho del Magistrado doctor HERNANDO AYALA PEÑARANDA para lo de su cargo

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Discutido y aprobado en Sala de Decisión Oral del 7 de diciembre de 2017)


EDGAR ENRIQUE BERNAL JÁUREGUI
Magistrado.-


CARLOS MARIO PEÑA DÍAZ
Magistrado.-


Xcastad
Nº 208
Dic. 11/2017




RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
 San José de Cúcuta, Cinco (05) de Diciembre de dos mil diecisiete (2017)
 Magistrado Sustanciador: **EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI**

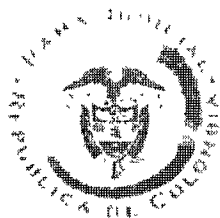
Radicado: 54001-23-33-000-2017-01377-00
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Actor: Clínica Ceginob Ltda.
Demandado: Nación – Ministerio de Salud y Protección Social –
 Superintendencia Nacional de Salud

OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE lo resuelto por el HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCION "B", en proveído de fecha doce (12) de octubre del 2017, por el cual esa superioridad CONFIRMÓ el auto apelado de fecha quince (15) de diciembre del 2016, proferida por esta Corporación. Por lo anterior, una vez ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente previo las anotaciones secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI
 Magistrado.-


 X Estado
 N° 208
 Torc. 11/2017



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Magistrado: HERNANDO AYALA PEÑARANDA

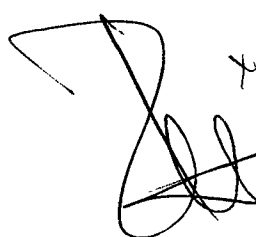
San José de Cúcuta, diciembre siete (7) de dos mil diecisiete (2017)

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Nelson Camilo Jaimes Parra
Accionado: UAE DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP
Radicado: 54-001-23-33-000-2014-00341-00

De conformidad con lo reglado en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **CÍTESE** a las partes, a sus apoderados y al señor Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos, con el fin de llevar a cabo **AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN** de que trata la norma en cita, para lo cual se señala como fecha el día lunes veintinueve (29) de enero del dos mil dieciocho (2017) a las tres y treinta de la tarde (3:30 p.m.).

NOTIFIQUESE y CUMPLASE


HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado

 x Estado
Nº 208
Dic 11/2017



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Magistrado Sustanciador: HERNANDO AYALA PEÑARANDA
San José de Cúcuta, siete (07) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número. 54-001-23-33-000-2013-00392-00
Demandante: CORPONOR
Demandado: Ingenieros Civiles Asociados México S.A.S.-
I.C.A. de México S.A.S., Termotécnica
Coindustrial S.A., ECOPETROL S.A.
Medio de control: Reparación Directa

Visto el informe secretarial¹ que antecede y una vez, realizado el estudio del expediente de la referencia, encuentra el despacho que según auto de fecha 16 de noviembre de 2017², se corrió traslado a ECOPETROL S.A. y CORPONOR, como solicitantes de la prueba pericial, la cual tiene como objeto determinar y cuantificar los perjuicios de todo orden causados en el río pamplonita a partir de la quebrada Iscalá, como consecuencia del derrame de crudo que tuvo ocurrencia el día 11 de diciembre de 2011, del oleoducto Caño Limón-Coveñas, administrado por ECOPETROL S.A. estableciendo con dicha prueba el quantum de los perjuicios ocasionados con dicho daño ambiental y las sumas de dinero requeridas para restablecer ese ecosistema.

Por su parte respecto dicho auto, el apoderado de CORPONOR a través de oficio del 21 de noviembre de 2017³, refiere que la entidad que puede rendir el informe requerido es la Universidad Francisco de Paula Santander, por medio de su facultad Ingeniería Ambiental.

En respuesta al auto del pasado 16 de noviembre, el apoderado judicial de ECOPETROL S.A. mediante oficio de fecha 24 de noviembre de 2017⁴ radicado ante la secretaria de esta corporación, comunicó que si bien la Profesora Elsa Astrid Ulloa Cubillos líder del el Grupo de Investigación Cultura y Ambiente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Colombia, mediante su escrito afirma no ser la capacitada para rendir el informe requerido, de las averiguaciones realizadas por dicho apoderado la Universidad Nacional de Colombia cuenta dentro de su oferta económica con Maestría en Ingeniería Ambiental y con profesionales en alto nivel de preparación en áreas afines como biología, hidrología, valoración de impactos ambientales y demás sub-

¹ Ver folio 689

² Ver folio 685

³ Ver folio 687

⁴ Ver folio 688

especialidades que eventualmente requiera el peritaje encargado; en razón a ello, solicita se requiera de manera perentoria a la Universidad Nacional de Colombia, para que designe a un profesional que cuente con la idoneidad suficiente para dirigir y conformar el equipo profesional que pueda cumplir con la tarea requerida por esta Corporación, so pena de imponer las sanciones que establece la ley por desacato a las órdenes judiciales.

Vistas las anteriores manifestaciones, tiene el Despacho que en auto del 04 de marzo de 2016⁵, se designó como perito a la Universidad Nacional de Colombia, para que realizara la prueba pericial decretada en audiencia inicial por esta Corporación; producto de la citada orden el 12 de abril de 2016⁶, la entidad designada ofició a este Tribunal señalando en dicha respuesta que les resulta imposible asumir la experticia solicitada; posteriormente, mediante auto del 14 de septiembre del corriente⁷, se le corrió traslado a las partes solicitantes de la prueba pericial con el fin de que informaran si conocían una entidad pública o privada que pudiese rendir el experticio encargado

En respuesta a dicho auto, el apoderado judicial de ECOPETROL S.A. mediante oficio del 21 de septiembre de 2017⁸, refirió que la entidad que pudiese rendir el peritazgo decretado, nuevamente sería la Universidad Nacional de Colombia, esta vez en cabeza de la profesora Elsa Astrid Ulloa Cubillos, líder del Grupo De Investigación Cultura y Ambiente de la Facultad de Ciencias Humanas de la citada Universidad, la cual mediante oficio remitido vía correo electrónico a esta Corporación, sostiene ser antropóloga y nunca haber realizado análisis de impacto de derrames de petróleo, ni determinación de perjuicios a nivel ambiental o social como resultado del mismo, además de ello que los miembros del Grupo de Investigación por ella dirigido en su mayoría son estudiantes de pregrado y posgrado, y no investigan temas relacionados, ni tienen experticia ni los conocimientos para determinar y cuantificar perjuicios de todo orden por el derrame de petróleo, por lo cual refiere que no es posible para ella ni para su Grupo Investigativo, aceptar la designación ni rendir el dictamen pericial encargado.

Tiene el Despacho, que con base en la información suministrada por el apoderado de la entidad demanda, se ha requerido en múltiples oportunidades a la Universidad Nacional en sus distintas dependencias, para que determine un profesional, el cual será designado como perito para realizar el dictamen

⁵ Ver folio 617 del expediente

⁶ Ver folio 623 del expediente

⁷ Ver folio 675 del expediente

⁸ Ver folio 678 del expediente

Radicado No.: 54-001-23-33-000-2013-00392-00.

Actor: CORPONOR.

AUTO.

decretado, recibiendo por parte de este centro educativo respuesta negativa a todos los requerimientos hechos, razón por la cual no es de recibo para el Despacho insistir con la designación como perito a dicha entidad, pues esta ha expresado de manera más que clara que no cuenta dentro de su planta educativa, docente y profesional con el capital humano idóneo para realizar dicho experticio, por lo cual no se accederá la solicitud de ECOPETROL S.A., de designar a la Universidad Nacional de Colombia como perito en proceso de la referencia.

En consecuencia a lo anterior y teniendo en cuenta lo expresado por el apoderado de la parte actora, se designará al **PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERIA AMBIENTAL, ADSCRITO A LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**, por consiguiente, se le comunicara tal decisión al Director del mismo en la Avenida Gran Colombia N° 12E-96 Barrio Colsag, Edificio Semipesados tercer piso, Cúcuta, Colombia, teléfono 5776655 extensión 168, correo electrónico ingambiental@ufps.edu.co. Debiendo manifestar su aceptación o justificar su rechazo dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la respectiva comunicación, conforme a lo previsto en el inciso 2° del artículo 49 del Código General Del Proceso, si acepta se le dará la respectiva posesión y se concederá un término de quince (15) días para que rinda el respectivo dictamen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado

X66rado
N° 208
Dic 11/2018



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Magistrado Sustanciador: HERNANDO AYALA PEÑARANDA

San José de Cúcuta, siete (07) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Radicado: 54-001-23-33-000-2017-00138-00
Demandante: Rita Aldana Laguado
Demandado: U.A.E. de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Por reunir los requisitos y formalidades previstas en la ley, **ADMITASE** la demanda presentada, en ejercicio del medio de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A., por la señora Rita Aldana Laguado, a través de apoderado contra la U.A.E. de Gestión Parafiscal y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, se dispone:

1º. Notifíquese personalmente este proveído y córrasele traslado de la demanda al señor Director o quien haga sus veces de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, de conformidad con los artículos 172 y 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 612 de la Ley 1564 de 2012.

2º. Notifíquese por estado al demandante la presente providencia. Y téngase en cuenta el buzón electrónico del apoderado de la parte actora jesalber1@hotmail.com para los efectos del artículo 205 del CPACA.

3º. Notifíquese personalmente el presente auto al **Ministerio Público** en los términos del artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612 del C.G.P. Para tal efecto téngase como dirección de buzón electrónico las informadas por los señores Procuradores Judiciales Delegados.

Radicado: 54-001-23-33-000-2016-01460-00
Actor: José A Y Gerardo E Zuluaga S A S
Auto admite demanda


4°. Notifíquese personalmente este proveído a la **AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO**, en los términos del artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612 del C.G.P. Para tal efecto téngase como dirección de buzón electrónico de dicha entidad la siguiente: procesos@defensajuridica.gov.co

5°. Conforme al numeral 4 del artículo 171 del C P.A.C.A, fijese la suma de **sesenta mil pesos (\$60.000.00)**, como gastos ordinarios del proceso, los cuales deberán ser consignados por la parte accionante en la cuenta que al efecto tiene el Tribunal en el Banco Agrario de la ciudad, para lo cual se señala un término de diez (10) días contados a partir de la notificación del presente auto.

6°. RECONÓZCASE personería para actuar al profesional del derecho Jesus Alberto Martínez Martínez como apoderado de la parte demandante, conforme y en los términos de los memoriales poder a él conferido.

NOTIFÍQUESE Y CÚPLASE


HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado

 PG estado
Nº 208
Dic. 14/2018



263

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
San José de Cúcuta, siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)
Magistrado Sustanciador: Dr. Edgar Enrique Bernal Jáuregui

EXPEDIENTE:	54-001-23-33-000-2017-00661-00
DEMANDANTE:	JOSE MARIO OSORIO NIETO
DEMANDADO:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL "UGPP"
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Una vez revisado el escrito de la demanda y los anexos, el Despacho considera que la misma cumple con los requisitos formales señalados en la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA-, razón por la cual se dispone:

1. **ADMÍTASE** la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, impetrara a través de apoderado debidamente constituido, el señor JAIME MARIO OSORIO NIETO.

La demanda de la referencia tiene como finalidad que se declare la nulidad de las **Resoluciones RDP 024909 de mayo 30 de 2013**, artículo 1, por medio del cual se niega el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación gracia; **RDP 030939 de julio 10 de 2013**, artículo 1, por medio del cual se desata el recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución, ambas expedidas por la Subdirección de Determinación de Derechos Pensionales de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL "UGPP", y la Resolución **RDP 036763 de agosto 12 de 2013**, por la cual se desata el recurso de apelación promovido contra la anterior decisión, confirmando, emanada de la Dirección de Determinación de Derechos Pensionales de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL "UGPP".

2. **NOTIFÍQUESE** por estado electrónico este proveído a la parte demandante, conforme a las previsiones del artículo 201 de la Ley 1437 de 2011.

3. De conformidad al artículo 171-4 ídem, **FÍJESE** la suma de ochenta mil pesos (\$80.000) como gastos ordinarios del proceso, que deberán ser consignados por la parte actora en la cuenta que al efecto tiene el Tribunal en el Banco Agrario de la ciudad, para lo cual se señala un término de diez (10) días contados a partir de la notificación del presente auto, con la prevención de lo señalado en el artículo 178 ibídem.

4. **TÉNGASE** como parte demandada a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL "UGPP".

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CPACA, **NOTIFÍQUESE** personalmente la admisión de la demanda a la entidad demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 612 del CGP.

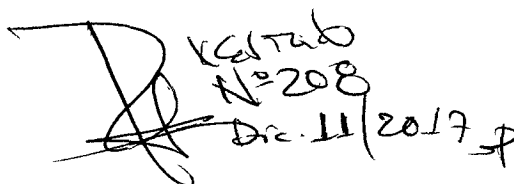
6. Vencido el término señalado en la disposición anterior, **CÓRRASE TRASLADO** de la demanda a la parte demandada y al Ministerio Público por el término de treinta (30) días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley 1437 de 2011.

7. **ADVIÉRTASE** a la entidad pública demandada, que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, durante el término para dar respuesta de la demanda, debe allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso que se encuentren en su poder, y que la inobservancia de dicho deber constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario(a) encargado(a) del asunto.

8. **RECONÓZCASE** personería para actuar al abogado Alfonso Gómez Aguirre, como apoderado de la parte demandante, en los términos y para los efectos del memorial poder visto en folio 1 del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI
Magistrado.-


K. Est. 208
Dic. 11/2017 p



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Magistrado Sustanciador: Dr. Edgar Enrique Bernal Jáuregui

RADICADO: 54-001-23-33-000-2017-00690-00
ACCIONANTE: JOSE PASTOR CABALLERO QUIÑONEZ
DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

Seria del caso proceder a verificar el cumplimiento de los presupuestos formales y sustanciales legales que debe reunir la demanda de la referencia para efectos de ser admitida, sino se advirtiera que el conocimiento de la misma no corresponde a este Tribunal en primera instancia, sino en su lugar, al de los Juzgados Administrativos Orales del Circuito Judicial de Cúcuta, por lo cual procederán a exponerse, las razones de derecho que conllevan a tal conclusión

1. ANTECEDENTES

El señor JOSE PASTOR CABALLERO QUIÑONEZ, actuando en nombre propio, mediante apoderado, presenta demanda en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitando la declaratoria de nulidad del acto administrativo Resolución 2495 del 30 de junio de 2017, mediante el cual se le negó la pensión de sanidad o invalidez y el reajuste de la indemnización.

2. CONSIDERACIONES

La importancia de estimar razonadamente la cuantía del proceso adquiere especial importancia para la definición de competencias entre los Juzgados y Tribunales Administrativos, en razón a que de ese razonamiento que debe hacer la parte demandante en el escrito de demanda, depende la determinación de la competencia. Al respecto, se considera que tal requisito de la demanda de estimar razonadamente la cuantía busca impedir que el demandante de forma caprichosa determine este factor y así pueda escoger a su arbitrio, el juez que a su juicio debe conocer el asunto en primera instancia.

La Ley 1437 de 2011 –CPACA- en sus artículos 152 y 155, establece la competencia de los Tribunales Administrativos y Jueces Administrativos en primera instancia, respectivamente, señalando para los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, lo siguiente:

“ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(.)

2 De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes (. .)”

“ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos

()

2 De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes (..)"

A su vez, el artículo 157 ibídem, prevé:

"Competencia por razón de la cuantía Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos sean los únicos que se reclamen (..) Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor" (..) "La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella. Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años."
(Se resalta)

De acuerdo con la normativa transcrita, la estimación de la cuantía para determinar la competencia del Tribunal Administrativo para asumir el conocimiento de la demanda, se establece conforme el valor de la pretensión mayor al momento de su presentación, esto es, la pretensión más alta debe exceder el valor de los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella y la estimación de perjuicios morales, a menos que éstos sean los únicos reclamados.

Descendiendo al caso concreto, visto el acápite de pretensiones de la demanda y estimación de la cuantía (fl. 37 reverso-38), se observa que el apoderado de la parte demandante, estima la cuantía en un valor total de \$44.263.008, correspondiente a las mesadas pensionales pendientes de pago sin exceder prescripción cuatrienal.

En ese contexto, como quiera que estamos frente a un asunto pensional, y el inciso 5 de la norma antes mencionada establece que los valores a cuantificar no deben superar los correspondientes a tres (3) años de lo que se pretenda, el Despacho encuentra que el cómputo arroja un monto de \$18'590.472¹, no alcanzándose entonces a superar el valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2017², fecha de presentación de la demanda; en consecuencia, no se habilita la competencia para que esta Corporación asuma el conocimiento en primera instancia en el asunto de la referencia.

Finalmente, se advierte al no contar con la competencia legal para el conocimiento del presente asunto en primera instancia, no se revisará si la demanda se ajusta o no a las previsiones señaladas en el artículo 162 y siguientes del CPACA, pues dicha labor corresponde al Juez que aprehenda el conocimiento de esta causa judicial.

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

RESUELVE

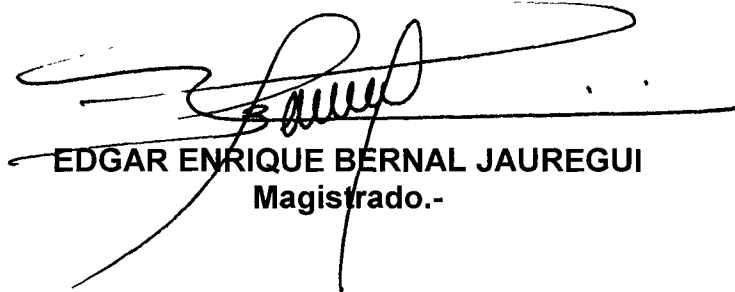
¹ Valor que resulta de multiplicar \$516 402 (valor de la mesada) por 36 meses

² Para el año 2017 equivale a \$36'885 850 00


PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE COMPETENCIA por el factor cuantía, para conocer en primera instancia el proceso de la referencia, de acuerdo a las consideraciones que anteceden.

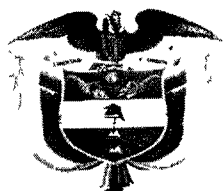
SEGUNDO: REMITIR el proceso de la referencia a la Oficina de Apoyo Judicial de Cúcuta, para que proceda a efectuar el reparto del mismo entre los Juzgados Administrativos Orales del Circuito Judicial de Cúcuta, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI
Magistrado.-

 x Estado
Nº 208
Dic. 11/2017



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, seis (6) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

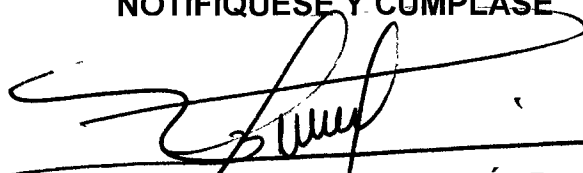
Magistrado Sustanciador: **EDGAR ENRIQUE BERNAL JÁUREGUI**


EXPEDIENTE:	54-001-23-33-000-2016-01464-00
DEMANDANTE:	GLADYS TORCOROMA RIZO DE LA ROSA
DEMANDADO:	NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Ha ingresado el expediente de la referencia al Despacho, advirtiéndose que en el auto del 13 de octubre del año en curso (fl. 95), por error involuntario, se dispuso devolver el expediente al Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, cuando lo pertinente es ordenar su remisión al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta por cuanto a éste despacho judicial le fue inicialmente repartido el presente asunto, quién, en virtud de lo expuesto en dicha providencia, deberá asumir el conocimiento.

Por lo anterior, en aplicación del artículo 286 del CGP¹, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, **CORREGIR** el auto del 22 de septiembre de 2017, en el sentido de, previas las anotaciones a que haya lugar, **DEVOLVER** el expediente al **Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta**, para que continúe con el conocimiento del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


EDGAR ENRIQUE BERNAL JÁUREGUI
Magistrado.-

 **x estab**
x 208
dic. 11/2017 **p**

¹ **ARTÍCULO 286. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y OTROS.** Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto
Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutive o influyan en ella



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)
Magistrado Sustanciador: Dr. EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI

EXPEDIENTE:	54-001-23-33-000-2017-00560-00
DEMANDANTE:	CEMEX COLOMBIA S.A.
DEMANDADO:	CORPONOR
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD

Procede el Despacho a pronunciarse acerca de las solicitudes de aclaración vistas en folios 24-25 y 28 del cuaderno de medidas cautelares, al igual que del recurso de apelación interpuesto contra el auto expedido el pasado 8 de noviembre hogaño, obrante en folios 29 a 48 del cuaderno de medidas cautelares.

I. ANTECEDENTES.

Mediante providencia que data del 8 de noviembre del año en curso, la Corporación decidió en forma negativa la solicitud de medida cautelar presentada por la parte demandante, consistente en suspensión provisional de los efectos del acto acusado.

Por medio de escrito radicado el 16 de noviembre del presente año, la apoderada de la parte demandante presenta solicitud de aclaración del auto del 8 de noviembre de 2017, en el sentido de aclararle las razones por las cuales en el sistema de la Rama Judicial el 15 de noviembre de 2017 se publica la existencia de un auto del 8 de noviembre, del cual no ha recibido notificación por estado

Posteriormente, a través de memorial presentado el 17 de noviembre de 2017, la apoderada de la parte demandante pide se le aclare las razones por las cuales en el auto del 8 de noviembre de 2017, publicado por estado del 16 de noviembre de 2017, se afirma que el medio de control es de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando la demanda es de nulidad simple.

Contra la providencia por medio de la cual el Despacho negó la solicitud de medida cautelar, la apoderada de la parte demandante, presentó recurso de apelación, del cual, a través de la Secretaría de la Corporación, se corrió traslado por el término de tres (3) días, mediante lista que se fijó el 22 de noviembre de 2017 (fl.49 c. medidas cautelares), de conformidad con lo previsto en el artículo 110 del CGP y numeral 2 del artículo 244 del CPACA, plazo dentro del cual de manera oportuna el apoderado de la entidad demandada presentó memorial describiendo el correspondiente traslado (fls.50 a 52 c. medidas cautelares).

Los motivos de inconformidad de la alzada se sintetizan en la falta de legalidad de los actos demandados, al imponer a los ciudadanos unos pagos que denominan compensaciones, pero que no consultan la definición legal de compensación ambiental ni guarda relación con la reparación de los daños ambientales, y aun si existiese equivocación en la denominación pero que tuviera naturaleza de tasa, tampoco podría así considerarse, ya que presenta problemas conceptuales que al confrontarlos con la legislación sobre el particular, en materia ambiental pierde su

sustento, dado que no se están remunerando servicios ambientales conforme parámetros legales.

Luego de efectuar exposición sobre los conceptos de medida compensatoria, tasa compensatoria y sus diferencias, considera que los actos demandados mencionan la necesidad de financiar programas y proyectos de la Corporación pero no se sustentan en la evaluación económica de los recursos afectados con el proyecto particular, y el costo de renovabilidad como criterio para fijar la tasa y tampoco en los impactos no manejados o mitigados para establecer una medida compensatoria.

Adicionalmente, sostiene que la solicitud de medida cautelar se fundamenta en la aplicación errada de la compensación ambiental y no en la existencia o no de facultades de la autoridad ambiental para efectuar cobro ambientales, siendo que CORPONOR no tiene competencia constitucional ni legal para exigir compensaciones o tasas por el uso o aprovechamiento del mineral de calizas, competencia que es privativa de la autoridad minera.

II. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER

2.1. Las solicitudes de aclaración

En primera medida, debe precisarse que el artículo 285 del CGP, aplicable al caso por virtud del artículo 306 del CPACA, ante la ausencia de norma expresa que regule la materia en el estatuto procesal administrativo, en lo referente a la aclaración de providencias consagra, en cuanto a los autos, que podrán ser aclarados, de oficio o a solicitud de parte, **cuando contengan conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutive de la sentencia o influyan en ella**. La aclaración procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria de la providencia.

Ahora, es importante resaltar que en el presente caso la apoderada de la parte demandante, solicita se aclare porque, por una parte, se incluyó en el sistema siglo XXI la anotación de la providencia por la cual se decidió la solicitud de la medida cautelar sin que a la par se le notificara por estado, y de otra, la providencia en los datos de referencia indica que se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuando lo correcto es nulidad simple.

2.1.1. Del trámite de notificación del auto por el cual se decidió la solicitud de decreto de medida cautelar elevada por la parte demandante

En relación a la petición de aclaración de la notificación por estado, el Despacho se abstiene de abordarla bajo la figura de la aclaración de providencias, en tanto **no conciernen a omisiones sobre aspectos relevantes de la litis que por este medio debieran resolverse**, razón por la cual se rechazará por improcedente.

Al margen de ello, con el fin de hacer pedagogía jurídica, se hace necesario recordarle a la apoderada de la parte demandante que el legislador **tiene definidos los autos** acudiendo a la técnica de la sustracción de materia, ya que después de referirse a las sentencias en el artículo 278 del CGP, dijo que "Son autos todas las demás providencias." Sabido es que los autos se clasifican en interlocutorios y de trámite, e igualmente en notificables y no notificables.

El auto interlocutorio se define porque “serán motivados de manera breve y precisa” (artículo 279 del CGP) y se caracteriza porque se emplea para decidir asuntos accesorios de cierta relevancia procesal, tales como **las medidas cautelares**, los incidentes y nulidades procesales.

Ahora, conforme lo indica el artículo 289 del CGP, los autos interlocutorios siempre deben notificarse a los sujetos procesales, no solo porque en su contra se pueden interponer los recursos legalmente concebidos, sino también porque “Las providencias judiciales se harán saber a las partes y demás interesados por medio de notificaciones,...”, al punto que con excepción de algunos casos “ninguna providencia producirá efectos antes de haberse notificado.” (Ib.).

Es más, la ejecutoria de las providencias está indefectiblemente ligada a la notificación, **ya que es a partir de ese momento que empiezan a correr los términos para que se formulen los recursos en su contra, para que se solicite aclaración o complementación, e incluso para que la firmeza llegue por el silencio de las partes** (CGP Art. 302).

Ahora bien, el artículo 198 del CPACA dispone que los autos no sujetos a notificación personal, se notificaran por estados electrónicos. Igualmente indica que se notificarán personalmente las siguientes providencias: i) Al demandado, el auto que admita la demanda; ii) A los terceros, la primera providencia que se dicte respecto de ellos; iii) Al Ministerio Público el auto admisorio de la demanda, salvo que intervenga como demandante. Igualmente, se le notificará el auto admisorio del recurso en segunda instancia o del recurso extraordinario en cuanto no actúe como demandante o demandado y; iv) Las demás para las cuales el Código ordene expresamente la notificación personal.

Dado lo anterior, como el auto interlocutorio que decide la solicitud de decreto de medida cautelar no se encuentra dentro de los que se deben notificar personalmente, es decir, ésta providencia debe notificarse por estado; para el efecto, el artículo 201 ibídem, dispone:

“(.) ARTÍCULO 201. NOTIFICACIONES POR ESTADO

*Los autos no sujetos al requisito de la notificación personal se notificarán por medio de **anotación en estados electrónicos para consulta en línea bajo la responsabilidad del Secretario**. La inserción en el estado se hará el día siguiente al de la fecha del auto y en ella ha de constar.*

- 1 La identificación del proceso.
- 2 Los nombres del demandante y el demandado
- 3 La fecha del auto y el cuaderno en que se halla.
4. La fecha del estado y la firma del Secretario

El estado se insertará en los medios informáticos de la Rama Judicial y permanecerá allí en calidad de medio notificador durante el respectivo día.

De las notificaciones hechas por estado el Secretario dejará certificación con su firma al pie de la providencia notificada y se enviará un mensaje de datos a quienes hayan suministrado su dirección electrónica.

De los estados que hayan sido fijados electrónicamente se conservará un archivo disponible para la consulta permanente en línea por cualquier interesado, por el término mínimo de diez (10) años.

Cada juzgado dispondrá del número suficiente de equipos electrónicos al acceso del público para la consulta de los estados.(...)” (Se resalta)

De acuerdo con la norma transcrita, la publicación de los estados electrónicos es la regla general para dar a conocer las providencias y, agrega, que es responsabilidad del Secretario efectuarlas.

La configuración normativa con asiento en el CGP y en el CPACA, en torno a la tipología de providencias y su forma de notificación, lleva a resaltar que el auto calificado el 17 de noviembre de 2017, de naturaleza interlocutoria, fue proferido de "notifíquese", en virtud a que era necesario ponerlo en conocimiento de los sujetos procesales para que hicieran uso de los recursos procedentes, si así lo decidían, lo cual efectivamente ocurrió, pues como se puede evidenciar en folio 23 del cuaderno de medida cautelar, acorde con el artículo 196 del CPACA, fue notificado a las partes y demás interesados con las formalidades prescritas en el Código, **por estado electrónico del 16 de noviembre de 2017.**

Además, el simple hecho que el 15 de noviembre de 2017, se encontrara efectuada anotación en el Sistema Siglo XXI de la Rama Judicial correspondiente a la expedición del auto, no implica desapego o irregularidad de la notificación, menos aún violación al debido proceso, pues no hay duda que los términos de ejecutoria de la decisión de negar la solicitud de medida cautelar, iniciaron su cómputo a partir, no del día en que se expidió la providencia, sino de la fecha en que se produjo la notificación por estado electrónico, acto material de comunicación efectuado por la Secretaría General de la Corporación el 16 de noviembre del año en curso, y por medio del cual se cumplió la finalidad de ponerle en conocimiento la decisión a la apoderada de la parte demandante, a través de mensaje dirigido al correo electrónico: adrianamartinez@martinezcordoba.com que suministró con la demanda.

2.1.2. Del error de carácter mecanográfico en la referencia del auto por el cual se decidió la solicitud de decreto de medida cautelar elevada por la parte demandante

En lo concerniente a la petición de aclaración de la providencia porque en los datos de referencia indica que se trata de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuando lo correcto es nulidad simple, resulta importante destacar que en el *sub exámine* lo que solicita la apoderada de la parte demandante, no es aclaración sino una corrección de error en palabras.

En efecto, en la referencia del auto del pasado 8 de noviembre de 2017, se advierte que por error de digitación involuntario, se señaló como medio de control nulidad y restablecimiento del derecho, cuando en realidad es medio de control de nulidad simple, el cual amerita su corrección en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, conforme las facultades previstas en el artículo 286 del CGP¹, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA.

Así pues, por constituir aquel un simple error tipográfico de palabras, se procederá a corregir el auto mencionado.

2.2. Del recurso de apelación radicado contra el auto por el cual se decidió en forma negativa la solicitud de decreto de medida cautelar presentada por la parte demandante

¹ ARTÍCULO 286. CORRECCIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS Y OTROS. Toda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto

Si la corrección se hiciera luego de terminado el proceso, el auto se notificará por aviso

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la parte resolutive o influyan en ella

La Ley 1437 de 2011 –CPACA- regula el trámite pertinente para la adopción de medidas cautelares y sobre los recursos procedentes contra dicha decisión. Así, el artículo 233 consagra que *“cuando la medida haya sido negada, podrá solicitarse nuevamente si se han presentado hechos sobrevinientes y en virtud de ellos se cumplen las condiciones requeridas para su decreto. Contra el auto que resuelva esta solicitud no procederá ningún recurso”*.

A su vez, el artículo 236 ibídem dispone que *“el auto que decrete una medida cautelar será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso. Los recursos se concederán en el efecto devolutivo y deberán ser resueltos en un término máximo de veinte (20) días. Las decisiones relacionadas con el levantamiento, la modificación o revocatoria de las medidas cautelares no serán susceptibles de recurso alguno”*.

Conforme la normativa citada en precedencia, se tiene que la Ley 1437 de 2011 guardó silencio en cuanto a los recursos procedentes contra la decisión que niega una medida cautelar; empero, el artículo 242 ídem, regula lo pertinente al recurso de reposición y establece que *“salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica”*.

En ese contexto, el Despacho advierte que contra el auto del 8 de noviembre de 2017, que negó la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos demandados solo procede el recurso ordinario de reposición, según lo establecido por el artículo 242 del CPACA, toda vez que sobre la procedencia del mismo no existe norma legal en contrario, y que la decisión no es de aquellas que son susceptibles de los recursos de apelación o de súplica².

Bajo ese orden de ideas, el Despacho declarará la improcedencia de la alzada propuesta por la apoderada de la parte demandante y, acorde con el parágrafo del artículo 318 del Código General del Proceso, a continuación, se dará trámite al recurso de reposición procedente, según la regla del artículo 242 del CPACA.

Analizados los argumentos esgrimidos en el recurso, bajo los cuales se insiste en el decreto de la medida cautelar, habrá de iterarse a la parte accionante que de acuerdo con los criterios legales y jurisprudenciales que ya fueron esbozados en el proveído objeto de inconformidad, en el asunto sub examine, no se advierte una clara situación de manifiesto desconocimiento del marco normativo alegado, en tanto se tiene que la Corporación Autónoma Regional CORPONOR, cuenta con la atribución de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente; así mismo, le asiste la función de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental, y recaudar, conforme a la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

² Sobre la improcedencia de la apelación contra auto que niega medida cautelar, consultar Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia del 4 de julio de 2017, C P Marta Nubia Velásquez Rico, radicación 11001-03-26-000-2013-00125-00(48488).

Con el marco normativo reseñado en la providencia recurrida, ha quedado claro también para el Despacho que a la autoridad ambiental CORPONOR, le correspondía implementar el programa de compensación de los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales renovables, constituido por recursos económicos obtenidos de la utilización directa de los recursos naturales por parte de los beneficiados con actos administrativos que otorgan concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales.

Al respecto, no se puede perder de vista que el Estado, en cumplimiento de su deber constitucional de proteger el medio ambiente y los recursos naturales y de garantizar el derecho que tienen todas las personas a gozar de un medio ambiente sano, está llamado a prevenir y controlar todos los factores de deterioro ambiental, a imponer sanciones legales y a exigir la reparación de los daños causados. Es en ese contexto teleológico que se enmarca la institución de las tasas retributivas, a través de las cuales el ordenamiento jurídico permite vincular a los agentes contaminantes a la reparación de los daños derivados de la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, en aplicación del principio del derecho ambiental que se resume en el apotegma *"el que contamina paga"*.

De acuerdo con las normas citadas en el auto del pasado 8 de noviembre de 2017, las tasas retributivas son un cobro que realiza la autoridad ambiental a las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, por la utilización directa o indirecta de los recursos naturales, en razón a los enormes costos sociales y ambientales así como a los efectos nocivos que entraña la contaminación de estos bienes de uso público.

Dichos institutos fueron concebidos, pues, para la defensa del ecosistema en el marco de un desarrollo sostenible, entendido como aquel que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias (principios 1 y 2 de la Declaración de Estocolmo de 1972; principios 3 y 4 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992 también conocida como Carta de la Tierra).

En otras palabras, la tasa retributiva surge como un instrumento de carácter económico para el control de la contaminación, que pretende incentivar el cambio de comportamiento en los agentes contaminantes de modo que evalúen económicamente en sus decisiones de producción el costo de utilizar el medio ambiente para realizar sus actividades económicas, que les permita o bien optar por correctivos tendientes a minimizar la contaminación y así incentivar la innovación tecnológica o asumir el costo de pagar por la explotación al medio ambiente y que afectan la calidad de los recursos.

La tasa retributiva cumple, así, con el objetivo de ser una señal económica efectiva para incentivar la descontaminación y mitigar el impacto en costos y daños sobre las comunidades y ecosistemas³, sustentadas en el principio universalmente aceptado, según el cual *"el que contamina paga"*.⁴

³Vid MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, Tasas retributivas Su impacto en la tarifa del servicio de alcantarillado, documento de trabajo elaborado conjuntamente por los Ministerios de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, publicado en Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico Retos y Resultados, Bogotá, diciembre de 2002, p 533 y ss

⁴ ANGEL GÓMEZ, Jorge Enrique, Tasas retributivas un enfoque proactivo, en Revista Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, No 5, diciembre de 2000, Bogotá, CRA, p 85 y ss

Es por ello que a través de la figura de las tasas retributivas y de compensación, contrario a lo expuesto por la parte demandante, la autoridad ambiental competente si está autorizada para cobrar a las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, una tasa por la exploración, explotación y producción directa o indirecta del recurso natural "piedra caliza", como consecuencia de la actividad económica que desempeñan los beneficiarios autorizados.

Tampoco sigue siendo de recibo para el Despacho el cargo consistente en que a través de los actos acusados se creó y reglamentó una contribución no contemplada en la Ley 99 de 1992 para el otorgamiento de licencia ambiental, por cuanto resulta evidente que el hecho generador o imponible que da lugar al cobro de la tasa estipulada en los actos emanados de CORPONOR, lo constituye es la sola utilización del recurso natural "piedra caliza", por cualquier persona natural o jurídica determinable por encontrarse beneficiado con el otorgamiento de una concesión, permiso, autorización y licencia ambiental requerida por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de dicho recurso natural.

Así las cosas, se reitera un vez más que el plan de compensación ambiental regional implementado por parte de CORPONOR, al igual que la tasa asignada a los titulares de concesión, permiso, autorización y licencia ambiental para la exploración, explotación y producción directa o indirecta de la "piedra caliza" observó lo previsto en la normativa legal aplicable, sin que para su determinación estuviese obligado a tener en cuenta el estudio de impacto ambiental requerido para el otorgamiento de la licencia respectiva, ni que su imposición debiera hacerse en el acto de otorgamiento de la licencia.

Para el Despacho tampoco tiene vocación de prosperidad el cargo consistente en que los actos acusados motivan el cobro de la compensación como parte de las obligaciones propias del licenciamiento ambiental, pero no consultan esta definición ni las que los Decretos 1220 de 2005 y 2820 de 2010 incluían, la cual era con el mismo sentido y alcance, y a pesar que se citan como fundamento dichos Decretos, como sustento normativo, no se acoge la definición en estos contenida para desarrollar la materia; ello, en virtud de que CORPONOR, autoridad ambiental competente, acudió a lo dispuesto en los Decretos 1220 de 2005 y 2820 de 2010, para efectos de fundamentar la obligación que le asiste a quienes cuentan con licencia autorizada para la exploración, explotación y producción directa o indirecta de la "piedra caliza", de cumplir con la compensación y manejo de los efectos ambientales de la actividad autorizada, que si bien en tales decretos se encuentra definida como *"las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos (artículo 1)"*, también es cierto que según se desprende del inciso segundo del artículo 42 de la Ley 99 de 1993, esta medida se puede traducir en una tasa para compensar los gastos de mantenimiento y recuperación de la renovabilidad de los recursos naturales renovables afectados en las comunidades y ecosistemas.

Bajo este derrotero, el Despacho deberá ratificar los argumentos esgrimidos en proveído anterior, en tanto advierte que no concurren a cabalidad los elementos necesarios y que hagan totalmente meritoria la imposición de la medida cautelar reclamada por la parte actora, razón por la cual no se repondrá la providencia dictada el 8 de noviembre de 2017.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

RESUELVE:

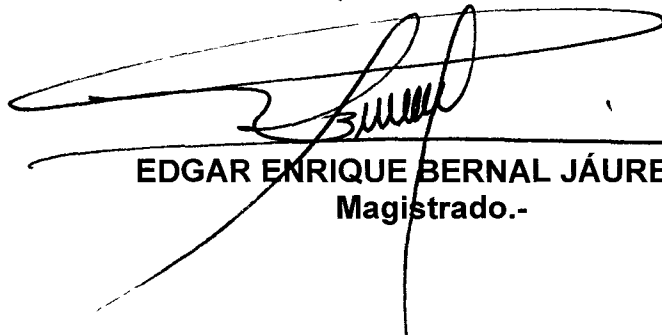
PRIMERO: RECHAZAR, por improcedentes, las solicitudes de aclaración de providencia elevadas por la parte demandante, conforme lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: CORREGIR la referencia del auto del 8 de noviembre de 2017, en el sentido de indicar que el presente proceso cursa en ejercicio del medio de control de nulidad simple.


TERCERO: DECLARAR improcedente el recurso de apelación propuesto por la apoderada de la parte demandante, contra el auto de fecha 8 de noviembre del año en curso, el cual negó la medida cautelar solicitada; de cara a los argumentos contentivos en la presente decisión. En su lugar tramitar el motivo de inconformidad planteado por la parte accionante como recurso de reposición.

CUARTO: NO REPONER la providencia proferida el día 8 de noviembre de 2017, de conformidad con lo expuesto en la presente decisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



EDGAR ENRIQUE BERNAL JÁUREGUI
Magistrado.-

 X Gestab
Nº 208
Dic. 11/2017



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, cuatro (4) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Magistrado Sustanciador: Dr. Edgar Enrique Bernal Jáuregui

EXPEDIENTE:	54-001-23-33-000-2017-00687-00
DEMANDANTE:	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A como vocera del PAP FIDUPREVISORA S A DEFENSA JURÍDICA DEL EXTINTO DAS Y FONDO ROTATORIO
DEMANDADO:	CARLOS ALBERTO SUAREZ REYES
MEDIO DE CONTROL:	REPETICIÓN

Una vez revisado el escrito de la demanda y los anexos, el Despacho considera que la misma cumple con los requisitos formales señalados en la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA-, razón por la cual se dispone:

1. **ADMÍTASE** la demanda que en ejercicio del medio de control de repetición consagrado en el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, impetrara a través de apoderado debidamente constituido, la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. como vocera del PAP FIDUPREVISORA S.A DEFENSA JURÍDICA DEL EXTINTO DAS Y FONDO ROTATORIO.

La demanda de la referencia tiene como finalidad que se declare responsable al señor **CARLOS ALBERTO SUÁREZ REYES**, por los perjuicios económicos causados con la condena impuesta en su momento a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, dentro del proceso de reparación directa, radicado 54 001 33 31 002 2008 00004 00, mediante sentencia de primera instancia del 28 de marzo de 2014 expedida por el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión de Cúcuta, y sentencia de segunda instancia del 27 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, posteriormente adicionada mediante providencia del 12 de febrero de 2016.

2. **NOTIFÍQUESE** por estado electrónico este proveído a la parte demandante, conforme a las previsiones del artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, la cual deberá surtirse de igual manera a las direcciones de correo electrónico dispuestas en la demanda, en virtud de lo dispuesto en el artículo 205 del CPACA.

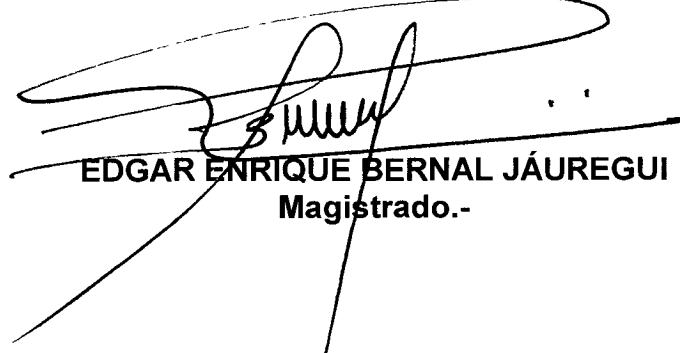
3. De conformidad al artículo 171-4 ídem, **FÍJESE** la suma de ochenta mil pesos (\$80.000) como gastos ordinarios del proceso, que deberán ser consignados por la parte actora en la cuenta que al efecto tiene el Tribunal en el Banco Agrario de la ciudad, para lo cual se señala un término de diez (10) días contados a partir de la notificación del presente auto, con la prevención de lo señalado en el artículo 178 íbidem.

4. Una vez cumplido lo dispuesto en el numeral anterior, **NOTIFÍQUESE** personalmente la admisión de la demanda al señor **CARLOS ALBERTO SUÁREZ REYES**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 79.539.621, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 200 del CPACA, y **CÓRRASE** traslado de la demanda por el término de treinta (30) días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 íbidem.


5. **NOTIFÍQUESE** al Ministerio Público, conforme a las previsiones del artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 612 de la Ley 1564 de 2012 –CGP-. Vencido el término señalado en la disposición anterior, córrasele traslado de la demanda por el término de treinta (30) días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del CPACA

6. **RECONÓZCASE** personería al abogado Diego Fernando Avellaneda Doneys, como apoderado de la parte demandante, en los términos y para los efectos del memorial poder y anexos vistos a folios 1 y 14-20 del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



EDGAR ENRIQUE BERNAL JÁUREGUI
Magistrado.-



Excedido
Nº 208
Dic. 11/2017 →



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Magistrado: HERNANDO AYALA PEÑARANDA

San José de Cúcuta, siete (07) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Radicado : 54-001-33-33-003-2013-00355-01

Actor : José Alexander Herrera Galván y otros

Demandado : Nación- Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación

Medio de control: Reparación Directa

Visto el informe secretarial que antecede (fl.231) y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a correr traslado por el término de diez (10) días, para que la partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, y atendiendo que el artículo 623 del Código General Proceso modificó la parte final de la norma antes citada, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta traslado al Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

Por lo brevemente expuesto, se dispone:

1.- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 623 del Código General del Proceso, córrase traslado por el término de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos de conclusión.

2.- Una vez vencido el término que tienen las partes para alegar, por Secretaría, surtase traslado al Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado

Manuscrito:
Aprobado
Nº 208
Dic 11/2017



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Magistrada Ponente: HERNANDO AYALA PEÑARANDA
San José de Cúcuta, siete (07) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

Radicado : 54-001-33-33-002-2015-008128-01
Actor : Gabriel Antonio Silva
Demandado : Nación- Ministerio de Educación Nacional-
 Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
 del Magisterio- Departamento norte de Santander

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Visto el informe secretarial que antecede (fl.144), y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 247 del CPACA, se procederá a correr traslado por el término de diez (10) días, para que la partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, y atendiendo que el artículo 623 del Código General Proceso modificó la parte final de la norma antes citada, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta traslado al Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

Por lo brevemente expuesto, se dispone:

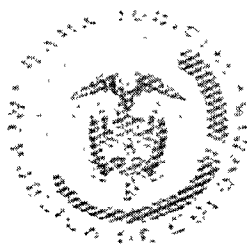
1.- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 623 del Código General del Proceso, córrase traslado por el término de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos de conclusión.

2.- Una vez vencido el término que tienen las partes para alegar, por Secretaría, súrtase traslado al Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNANDO AYALA PEÑARANDA
 Magistrado

X estudio
 N° 208
 Dic. 11/2017



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Magistrada Ponente: HERNANDO AYALA PEÑARANDA
San José de Cúcuta, siete (07) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

Radicado : 54-001-33-40-009-2016-00897-01
Actor : Gregorio Pabón
**Demandado : Nación- Ministerio de Educación Nacional-
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio**

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Visto el informe secretarial que antecede (fl.99), y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a correr traslado por el término de diez (10) días, para que la partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, y atendiendo que el artículo 623 del Código General Proceso modificó la parte final de la norma antes citada, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

Por lo brevemente expuesto, se dispone:

- 1.- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 623 del Código General del Proceso, córrase traslado por el término de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos de conclusión.
- 2.- Una vez vencido el término que tienen las partes para alegar, por Secretaría, súrtase traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado

XGmab
Nº 208
Dic. 11/2017



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Magistrada Ponente: HERNANDO AYALA PEÑARANDA
San José de Cúcuta, siete (07) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

Radicado : 54-001-33-33-002-2015-0257-01
Actor : Martha Eugenia Araque Leal
Demandado : Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Visto el informe secretarial que antecede (fl.136), y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a correr traslado por el término de diez (10) días, para que la partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, y atendiendo que el artículo 623 del Código General Proceso modificó la parte final de la norma antes citada, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

Por lo brevemente expuesto, se dispone:

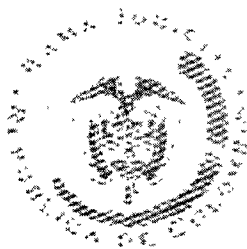
1.- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 623 del Código General del Proceso, córrase traslado por el término de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos de conclusión.

2.- Una vez vencido el término que tienen las partes para alegar, por Secretaría, súrtase traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado

x Estado
 N° 208
 Dic. 11/2017

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER****Magistrada Ponente: HERNANDO AYALA PEÑARANDA****San José de Cúcuta, siete (07) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).**

Radicado : 54-001-33-33-002-2014-01159-01
Actor : Rogelio Gómez Carrillo
Demandado : Departamento Norte de Santander

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Visto el informe secretarial que antecede (fl.146), y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a correr traslado por el término de diez (10) días, para que la partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, y atendiendo que el artículo 623 del Código General Proceso modificó la parte final de la norma antes citada, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta traslado al Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

Por lo brevemente expuesto, se dispone:

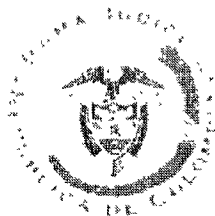
1.- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 623 del Código General del Proceso, córrase traslado por el término de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos de conclusión.

2.- Una vez vencido el término que tienen las partes para alegar, por Secretaría, sùrtase traslado al Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado

Revisado
Nº 208
Dic. 11/2017



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Magistrado: HERNANDO AYALA PEÑARANDA

San José de Cúcuta, diciembre siete (7) de dos mil diecisiete (2017)

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Jaime Cárdenas Santos
Accionado: UAE DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP
Radicado: 54-001-23-33-000-2014-00286-00

De conformidad con lo reglado en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **CÍTESE** a las partes, a sus apoderados y al señor Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, con el fin de llevar a cabo **AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN** de que trata la norma en cita, para lo cual se señala como fecha el día lunes veintinueve (29) de enero del dos mil dieciocho (2018) a las tres de la tarde (3:00 p.m.).

NOTIFIQUESE y CUMPLASE


HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado

X65716
Nº 208
Dic. 11/2017



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Magistrado Sustanciador: HERNANDO AYALA PEÑARANDA

San José de Cúcuta, siete (07) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

EXPEDIENTE:	54-001-23-33-000-2017-00101-00
DEMANDANTE:	Pablo Guillermo Silva Melo
DEMANDADO:	Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
MEDIO DE CONTROL:	Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Seria del caso proceder a dar cuenta acerca de la admisión de la demanda propuesta por el señor Pablo Guillermo Silva Melo Duarte a través de apoderado judicial, sino se advirtiera que el conocimiento de la misma no corresponde al Tribunal en primera instancia, sino en su lugar, al de los Juzgados Administrativos Orales del Circuito Judicial de Cúcuta, conforme a lo siguiente

I. ANTECEDENTES

Da cuenta el libelista a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho procurar la nulidad parcial del acto administrativo Oficio Radicado de salida SAC 2016RE1732 del 10 de febrero del 2016, expedida por la Secretaria de Educación, por la cual reconoce y ordena el pago de una cesantía parcial, con el consecuente restablecimiento del derecho, demanda que fuera inicialmente promovida para ante los Juzgados Administrativos y que le correspondiera en su orden al Noveno de esta ciudad, dicho despacho determinó conforme se advierte a proveído del siete (07) de febrero del presente año declararse sin competencia en virtud de la cuantía conforme y se advierte a folio 41 razón del presente pronunciamiento.

II. CONSIDERACIONES

En punto de la competencia la Ley 1437 de 2011 –CPACA- en sus artículos 152 y 155, precisa los asuntos que corresponde a los Tribunales Administrativos y Jueces

Administrativos en primera instancia, respectivamente, señalando para los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, lo siguiente:

“ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos (.)

2 De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes (.)”

“ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos (.)

2 De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes (.)”

A su vez, el artículo 157 ibídem, prevé:

“Competencia por razón de la cuantía Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos sean los únicos que se reclamen (.) Para los efectos aquí contemplados, **cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor**” (.) “La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella **Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años**”. (Se resalta)

En el sub lite encontramos que la parte actora solicita que como consecuencia de la nulidad parcial del acto administrativo contenido en el acto administrativo Oficio Radicado de salida SAC 2016RE1732 del 10 de febrero del 2016, se proceda a reconocer y pagar las cesantías de manera retroactiva tomando para ello el tiempo de servicios a partir de la vinculación del demandante y liquidada sobre el último salario devengado.

En el libelo demandatorio se razonó la cuantía de la demanda, en la suma de \$65.867.926, correspondiente a la diferencia entre el valor del reconocimiento total de las cesantías y el reconocimiento parcial efectuado por el demandado en el acto administrativo objeto de censura.

Si bien éste Despacho venía dando curso a las demandas incoadas por el mismo tema que hoy ocupa la atención del Tribunal, teniendo en cuenta para determinar la cuantía la suma propuesta por la parte actora como pretensión mayor en la

demanda, reestudiándose la interpretación en punto de la competencia puntualmente respecto de las pretensiones y revisado el acto administrativo acusado, se tiene que la Secretaría de Educación del Municipio de San Jose de Cúcuta, realiza la liquidación de las cesantías parciales solicitadas por el demandante, con base en el valor las cesantías reportadas durante el tiempo de servicios de la misma desde el año 1993 al 2014, que corresponde a la vida laboral del señor Pablo Guillermo Silva Melo.

El centro de discusión ante la judicatura corresponde el determinar, si la demandante tiene o no derecho a que se aplique el régimen de liquidación de sus cesantías de forma retroactiva, régimen que tiene como característica principal, que se tenga en cuenta el último sueldo devengado por la servidora pública para efectos de liquidar la prestación por todo el tiempo de servicios, lo que garantiza la actualización de dicha prestación.

Si bien el razonamiento en la demanda la cuantía corresponde a la diferencia que percibiría la demandante por concepto de cesantías liquidada de manera retroactiva por la totalidad del tiempo servido, esto es por espacio superior a 20 años, no menos resulta que la fuente de la reclamación (cesantías) se causan anualmente y sin que por ello se catalogue como prestación periódica, razonable resulta deba atenderse a fin de ajustar la cuantía a lo que en punto se ha prodigado por el legislador respecto de las prestaciones que si tienen esa condición, esto es las causadas en tres años.

En el sub judice, la diferencia a pagar fue estimada por la parte actora en \$65.867.926, suma que al ser dividida entre los 20 años que se toman como vida laboral del actor en el ejercicio docente, arroja un resultado de \$3.293.396.3, de lo que determina conforme y por espacio de tres años no supera el valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes en consecuencia, no se habilita la competencia para que esta Corporación asuma el conocimiento en primera instancia en el asunto de la referencia.

Así las cosas, concluye el Despacho, que las presentes diligencias habrán de ser devueltas al **Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta**, por cuanto a éste despacho judicial le fue inicialmente repartido el presente asunto, quien, en virtud de lo expuesto, deberá asumir el conocimiento.

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,


RESUELVE

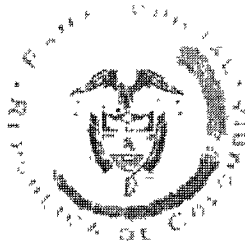
PRIMERO: Previas las anotaciones a que haya lugar, **DEVOLVER** el expediente al **Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta**, para que continúe con el conocimiento del presente asunto.

SEGUNDO: Por Secretaría háganse las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado

 X Estado
Nº 208
Diciembre 11/2017



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Magistrado: HERNANDO AYALA PEÑARANDA
San José de Cúcuta, siete (07) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Radicado : 54-001-23-33-000-2017-00073-00
Actor : Luis Daniel Méndez Valencia y otros
Demandado : Nación- Ministerio de Defensa-Ejercito Nacional.

Medio de control : Ejecutivo

De conformidad con el artículo 152 numeral 7 de la Ley 1437 de 2011, procede el Despacho a remitir el expediente de la referencia por competencia a los Juzgados Administrativos del Circuito de Cúcuta, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Cláusula de competencia del Tribunal Administrativo para conocer en primera instancia de los procesos ejecutivos

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo regula dos situaciones diferentes respecto del proceso ejecutivo en materia contencioso administrativa. La primera, está contemplada por el artículo 298, ibídem, que se refiere al cumplimiento de la sentencia (ejecución de la sentencia), cuando dentro del mismo expediente y sin necesidad de demanda se solicita por parte del acreedor al juez que profirió la sentencia condenatoria –que es el Título ejecutivo– que se ordene su cumplimiento inmediato. La segunda, contemplada en el artículo 299, Inc. 2 del C.P.A.C.A. que señala que las condenas impuestas a entidades públicas que consisten en la liquidación o pago de una suma de dinero serán ejecutadas por la misma jurisdicción administrativa de conformidad con las reglas de competencia contenidas en el C.P.A.C.A.; situación que hace referencia a los eventos en que por medio de una demanda ejecutiva se pretenda el pago de una suma de dinero como consecuencia de una condena a una entidad pública.

Señala el artículo 299, inc. 2 del C.P.A.C.A. que:

"Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero serán ejecutadas ante esta misma jurisdicción según las reglas de competencia contenidas en este código. si dentro de los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia la entidad obligada no le ha dado cumplimiento"

Estas dos situaciones indicadas, se refuerzan con los comentarios que sobre el C.P.A.C.A. hiciere uno de sus redactores, el Doctor Enrique José Arboleda Perdomo, quien señala:

*"El artículo 298 en el segundo inciso, a pesar de afirmar que el proceso ejecutivo se hará bajo las mismas condiciones de las sentencias, enseguida señala: el juez competente en estos eventos se determinará de acuerdo con los factores territoriales y de cuantía establecidos en este código, de manera que el juez que profirió la sentencia, sino es el competente conforme a las reglas generales, deberá enviarlo al que deba adelantar la ejecución, según la cuantía y la distribución de la jurisdicción en función del territorio"*¹.

El Magistrado Sustanciador considera que la competencia para conocer del proceso de la referencia, se debe determinar con base en el artículo 299, Inc. 2 del C.P.A.C.A. que remite a las reglas generales de competencia que establece el mismo código, y estas reglas aplican los factores territorial y de cuantía. El artículo 152, Núm. 7 establece que los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia:

"De los procesos ejecutivos, cuya cuantía exceda de mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes"

Por su parte, el artículo 155 del CPACA prevé la competencia de los Juzgados Administrativos en procesos ejecutivos, en los siguientes términos:

"ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(. .)

7 De los procesos ejecutivos, cuando la cuantía no exceda de mil quinientos (1 500) salarios mínimos legales mensuales vigentes."

¹ Arboleda Perdomo, Enrique José. *Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011* Primera edición. Legis Editores S.A. Bogotá 2011. Pág 422.

En el presente asunto, la pretensión de la parte ejecutante consiste en que se libre mandamiento de pago por la suma de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL QUINIETOS TREINTA Y SIETE PESOS CON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$894'130.537⁷⁵⁴)**, por concepto de capital adeudado el cual fue concedido mediante sentencia debidamente ejecutoriada y los intereses moratorios que acaecieron desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia hasta el momento de la presentación de la demanda, lo que sin duda alguna constituye la cuantía, equivalente a **1212.02 SMLMV²**. Luego teniendo en cuenta que esta cifra no supera los mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, señalados en el numeral 7º del artículo 152 del CPACA, es evidente que este Tribunal no tiene competencia para conocer del presente asunto.

En ese sentido, es de resaltar que en providencia del 07 de octubre de 2014 proferida por el Consejo de Estado, con ponencia del Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa³ en un caso similar, se dispuso que para determinar la competencia de quien debía conocer de las ejecuciones de sentencias judiciales ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo se acudiría a los demás factores para la determinación de competencias, tales como la cuantía.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que por el factor cuantía esta Corporación no es competente para conocer del presente asunto sino los jueces administrativos, de conformidad con las normas anteriormente citadas, le corresponde conocer de la presente demanda a los Juzgados Administrativos del Circuito de San José de Cúcuta.

Así las cosas, se ordenará la remisión del presente proceso a la Oficina de Apoyo Judicial a efectos de que sea repartido entre los Juzgados Administrativos Orales del Circuito de Cúcuta.

Por lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

RESUELVE

² Teniendo en cuenta que la demanda fue presentada en el año 2016 (folio 10), y el salario mínimo mensual está fijado en \$689 454

³ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera-Subsección c Auto del 07 de octubre de 2014. Radicado 47001-23-33-000-2013-00224-01 (50006) f

Rad 54-001-23-33-000-2017-00073-00
Actor Luis Daniel Méndez Valencia
Auto


PRIMERO: DECLÁRESE sin competencia para conocer del presente asunto, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: En consecuencia, **REMÍTASE** el expediente a la Oficina de Apoyo Judicial a efectos de que sea repartido entre los Juzgados Administrativos Orales del Circuito de Cúcuta, previas las anotaciones a que haya lugar

TERCERO: Por Secretaría. **COMUNÍQUESE** la presente decisión a la parte ejecutante.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado

 X G. S. Izado
Nº 208
Dic. 11/2017



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)


Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-**2014-00907**-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Fredy Alberto Carillo Ramírez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Municipio de San José de Cúcuta

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

 *Recebido*
Nº 208
Dic. 11/2017



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

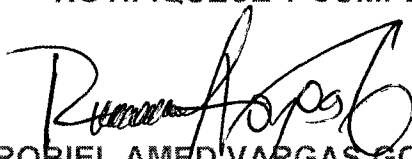
San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)


Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-01037-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Inés Blanco Montero
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Municipio de San José de Cúcuta

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

 x Gestab
Nº 208
dic. 11/2017



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

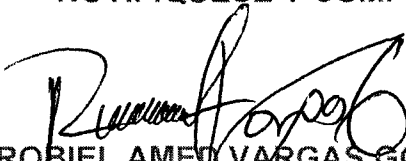
San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)


Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-01032-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Jesús Arturo Guzmán Arévalo
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Municipio de San José de Cúcuta

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMEL VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

 *Restab
Nº 208
Dic. 11/2017*



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

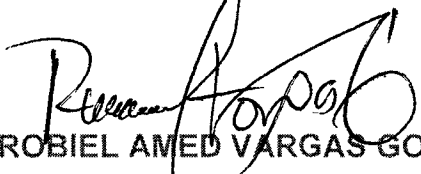
San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

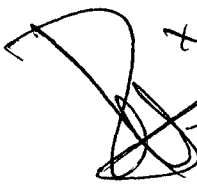
Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-01019-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Belcy Yolanda Pinto Durán
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Municipio de San José de Cúcuta

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

 X estado
Nº 2008
Dic. 11/2017



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-00954-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Maribel Pineda Medina
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Departamento Norte de Santander

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

Recibido
Nº 208
Dic. 11/2017



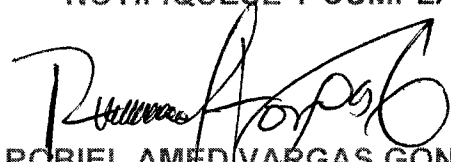
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)


Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-00864-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Gicela Guerrero
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Departamento Norte de Santander

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMÉD VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

 Xesro
Nº 208
Dic. 11/2017



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Ref: Proceso Rad 54-001-33-33-005-2014-00914-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Hernando Enrique Rangel Rojas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Municipio de San
José de Cúcuta

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

*Recibido
Nº 208
Dic. 11/2017*



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

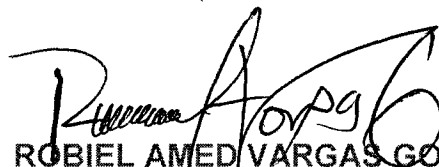
San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)


Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-00938-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Viany Hernández Carrascal
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Departamento Norte de Santander

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

 Restab
Nº 208
Dic. 11/2017



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

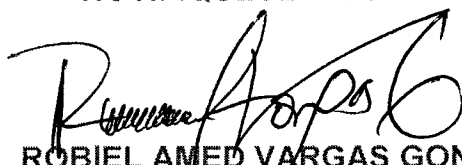
San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)


Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-00946-01
 Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
 Accionante: Lugdy Torcoroma Barbosa Vergel
 Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Departamento Norte de Santander

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO


 x estado
 N° 208
 Dic. 11/2017



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, seis (06) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Ref: Proceso Rad: 54-001-23-33-000-2017-00354-00
 Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
 Accionante: Miguel Ángel Mateus Fuentes
 Demandado: Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
 Administración Judicial


Una vez revisado el expediente, considera esta Presidencia que se hace necesario dejar sin efectos el Acta de Sorteo de Juez Ad – Hoc que fue realizada el día 24 de noviembre del presente año, dado que dicho sorteo y acta fueron realizados bajo las condiciones y el formato utilizado para la designación de Juez Ad – Hoc y no como Acta de Sorteo para Conjuez Ponente.


Por lo anterior a fin de continuar con el trámite del presente proceso, se procederá a fijar nueva fecha y hora para para llevar a cabo **el sorteo de conjueces**, que deberán conocer del presente asunto.

En virtud de lo anterior se **FIJA** el día **DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE (2017) A LAS 09:00 A.M.** para que se lleve a cabo sorteo de conjuez.

El sorteo se llevará a cabo en este Despacho, ante la presencia del suscrito Magistrado y la Abogada Asesora.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

 X Estado
 N° 208
 Dic 11/2017



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER


San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)


Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-**2014-01028**-01
 Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
 Accionante: Luz Marina Martínez Sarmiento
 Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Municipio San José de Cúcuta

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO


 x Estada
 N° 208
 Dic 11/2017



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER


San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-00931-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Lidia Esther Trillos Cárdenas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Departamento Norte de Santander

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

x Estado
Nº 208.
Dic. 11/2017



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-00959-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Cesar Antonio Celis Jaimes
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Municipio de San José de Cúcuta

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

cestrado
Nº 208
Dic. 11/2017



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)


Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-01021-01
 Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
 Accionante: Ana Isabel Ibarra Rolón
 Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Municipio de San José de Cúcuta

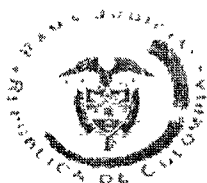
Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO


 x Estado
 N° 208
 Dic. 11/2017



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

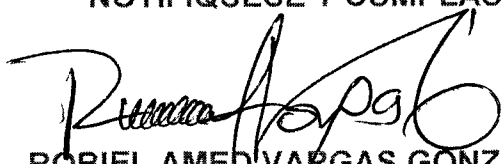
San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)


Ref. Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-01007-01
 Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
 Accionante: Ciro Quintero
 Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Departamento Norte de Santander

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO


 X. Esteban
 N° 208
 Dic. 11/2017



325

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Magistrado: HERNANDO AYALA PEÑARANDA

San José de Cúcuta, siete (07) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Radicado : 54-001-33-33-003-2013-00513-01

Actor : Diofante Mieles Martínez y otros

Demandado : Nación- Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación

Medio de control: Reparación Directa

Visto el informe secretarial que antecede (fl.324) y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a correr traslado por el término de diez (10) días, para que la partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, y atendiendo que el artículo 623 del Código General Proceso modificó la parte final de la norma antes citada, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta traslado al Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

Por lo brevemente expuesto, se dispone:

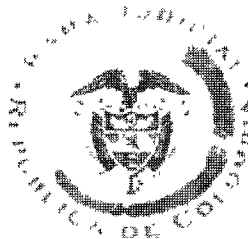
1.- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 623 del Código General del Proceso, córrase traslado por el término de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos de conclusión.

2.- Una vez vencido el término que tienen las partes para alegar, por Secretaría, súrtase traslado al Procurador 23 Judicial II para Asuntos Administrativos por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado

*Restado
Nº 208
Dic 11/2017*



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
Magistrado sustanciador: HERNANDO AYALA PEÑARANDA

San José de Cúcuta, siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Radicado: 54-001-23-33-000-2017-00329-00
Demandante: Jairo Augusto Ordoñez Peñaranda
Demandado: Nación – Ministerio de educación – Fondo de prestaciones sociales del magisterio, Departamento Norte de Santander – Secretaria de Educación, Fiduciaria La Previsora S.A.
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

En estudio de admisión de la demanda de la referencia, encuentra el Despacho que se hace necesario declararse sin competencia para conocer el presente asunto y en consecuencia remitir el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito de Cúcuta, de acuerdo con lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

El señor Jairo Augusto Ordoñez Peñaranda presenta demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitando se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en los oficios del 11 de marzo de 2015 proferido por la Secretaria de Educación de Norte de Santander mediante el cual se dio respuesta al derecho de petición del 18 de febrero del 2015; del 8 de enero del 2016 Radicado No. 20160930001601 emitido por la Fiduprevisora S.A. - Directora de Afiliación y Recaudos en la cual suspendió el pago de la pensión del actor; 8 de agosto de 2016, Radicado 2016ER-131319, 2016EE-102765, suscrito por la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación Nacional en respuesta al derecho de petición de fecha 21 de julio del 2016 y del 19 de octubre del 2016, Radicado 2016EE-143083 suscrito por la Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio en mención.

2. CONSIDERACIONES:

De acuerdo con lo consagrado en el artículo 155 del C.P.A.C.A. los Jueces Administrativos en primera instancia conocerán de los siguientes asuntos:

- “ 2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controvertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía no exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes ”

Así mismo el artículo 157 de la normatividad en cita, en lo que respecta a la competencia por razón de la cuantía dispone:

“ **Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía.** Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor

En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento

La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella

Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años ” (Negrillas del Despacho)

En atención a lo dispuesto en la norma en cita, se tiene que en el presente caso se reclaman prestaciones periódicas, por cuanto se solicita la nulidad de los actos administrativos que suspendieron el reconocimiento y pago de la pensión mensual vitalicia por jubilación y determinaron la incompatibilidad entre una pensión reconocida por la Secretaría de Educación Departamental y el salario como Juez Octavo Penal Municipal de Control de Garantías de Cúcuta, debiéndose tener en cuenta tres (3) años no sesenta y cuatro (64)

meses como lo señaló el demandante en el acápite de estimación razonada de la cuantía, los cuales conforme se indicara correspondería a treinta y cinco millones cuatrocientos setenta mil novecientos cuarenta y cuatro pesos (\$35.470.944), equivalente a treinta y seis (36) meses antes de la presentación de la demanda, conforme a los valores que el demandante señala a folio 15 del expediente.

Así las cosas el monto correspondiente a treinta y seis (36) meses de la mesada pensional antes de la presentación de la demanda, no supera treinta y seis millones ochocientos ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta pesos (\$36'885.850) que es el tope máximo de competencia de los Jueces Administrativos en primera instancia para el año 2017, correspondiente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes contemplados en el numeral segundo del artículo 155 del C.P.A.C.A.

Por último ha de señalarse que el artículo 168 del C.P.A.C.A. indica que en caso de presentarse falta de competencia, le corresponde al Juez de instancia, ordenar remitir el expediente al competente, a la mayor brevedad posible, señalando que para todos los efectos se tendrá en cuenta la presentación inicial de la demanda, realizada en el Despacho judicial que ordena la remisión.

En virtud de lo anterior considera el Despacho que el competente para adelantar el trámite de la presente demanda son los Jueces Administrativos del Circuito de Cúcuta conforme lo previsto en las normas antes mencionadas, por lo que se dispondrá su remisión inmediata.

En mérito de lo brevemente expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander

RESUELVE:

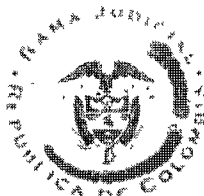
PRIMERO: REMITIR por competencia a los Juzgados Administrativos del Circuito de Cúcuta – Reparto la demanda de la referencia, conforme lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Por Secretaria envíese el expediente a la Oficina Judicial a efectos someta a reparto entre los Juzgados Administrativos de Cúcuta el mismo, déjense las anotaciones secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNANDO AYALA PEÑARANDA
Magistrado

Revisado
Nº 208
Dic 11/2017



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
San José de Cúcuta, seis (06) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Medio de Control: Nulidad.
Radicado No: 54-001-23-33-000-2017-00741-00
Demandante: Héctor Josue Nossa
Demandado: Municipio de Villa del Rosario, Departamento de Tránsito y Transporte de Villa del Rosario.

Al efectuar el análisis para proveer sobre la admisión de la demanda de la referencia, encuentra el Despacho que la misma no puede ser admitida en este Tribunal en primera instancia y lo pertinente será remitirla a los Juzgados Administrativos Orales de Cúcuta, conforme con lo siguiente:

1º.- La demanda de la referencia fue presentada en ejercicio del medio de control de nulidad (art. 137 del CPACA), solicitando se declare la nulidad del Acuerdo 017 de Octubre de 2013, proferido por el Concejo Municipal de Villa del Rosario; el proceso de Convocatoria Pública 001 de 2013, y el Contrato Interadministrativo No. 01 suscrito entre el Departamento de Transito y Transporte de Villa de Rosario y la empresa de tránsito y transporte de Villa del Rosario.

Al designarse las partes se indica que son el Ex alcalde de Villa del Rosario Carlos Julio Socha Hernández, el Concejo Municipal de Villa del Rosario y el Departamento de Transito y Transporte de Villa de Rosario.

En el acápite de Competencia se indica que la presente demanda le corresponde a este Tribunal Administrativo, en primera instancia, por tratarse de un acto administrativo expedido por una autoridad legislativa municipal, de acuerdo a lo previsto en el numeral 1 del artículo 155 del CPACA.

2º.- - Como es sabido, para efectos de determinar la competencia de este Tribunal para conocer del asunto de la referencia en primera instancia, debe tenerse en cuenta lo preceptuado en el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, que dispone en su numeral 1º.:

“Artículo 152. Competencia de los Tribunales Administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

1º.- De los de nulidad de los actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden departamental, o por las personas o entidades de derechos privado cuando cumplan funciones administrativas en los citados órdenes.”

Conforme la citada norma, es totalmente claro que la demanda de la referencia no se dirige contra actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden departamental, pues es evidente que se pretende la nulidad de un Acuerdo proferido por el Concejo Municipal de Villa de Rosario y el Contrato

Interadministrativo No. 01 suscrito entre el Departamento de Transito y Trasporte de Villa de Rosario y la empresa de tránsito y transporte de Villa del Rosario.

Conforme lo previsto en los artículos 312 y 314 de la Constitución, el Concejo Municipal y el Alcalde, son los dos organismos principales de la administración del nivel municipal con competencia en el territorio del respectivo municipio.

En estas circunstancias, resulta diáfano que este Tribunal carece de competencia para conocer del asunto de la referencia en primera instancia, y en su lugar la competencia está radicada en los Juzgados Administrativos Orales de Cúcuta en primera instancia, en los términos del artículo 155 numeral 1° de la Ley 1437 de 2011, ya que la demanda está dirigida contra actos administrativos proferidos por funcionarios u organismos del orden municipal.

De tal manera que, en aplicación del artículo 168 de la Ley 1437 de 2011¹, se declarará la falta de competencia para el conocimiento del presente asunto en primera instancia por este Tribunal, y se dispondrá devolver el expediente a la oficina de apoyo judicial – reparto- para que sea repartida entre los Juzgados Administrativos Orales del Circuito de Cúcuta.


En consecuencia se dispone:

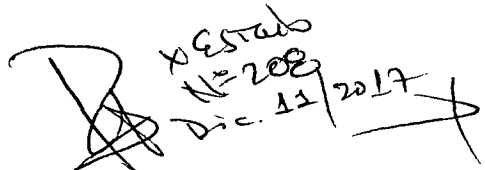
PRIMERO: Declarar la falta de competencia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, para conocer en primera instancia de la demanda de nulidad de la referencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Por Secretaría **remítase** el expediente a la oficina de apoyo judicial – reparto- para que sea repartida entre los Juzgados Administrativos Orales del Circuito de Cúcuta.

TERCERO. Háganse las anotaciones y registros secretariales a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO


x Estab
Nº 208
Dic. 11/2017

¹ ARTICULO 163. FALTA DE JURISDICCION O DE COMPETENCIA. En caso de falta de jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el Juez ordenará remitir el expediente al competente, en caso de que existiere a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la disertación iniciada hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

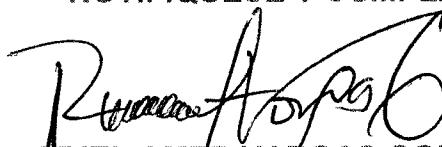
San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)


Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-00974-01
 Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
 Accionante: Elizabeth Moreno Bonilla
 Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Departamento Norte de Santander

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

 x Estab
 N° 208
 Dic. 11/2017



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Ref: Proceso Rad 54-001-33-33-005-2014-00995-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Denis Antonio Julio Ruedas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Departamento Norte de Santander

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

x estado
Nº 208
dic 11/2017



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

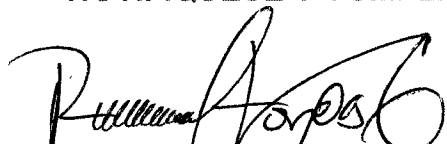
San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

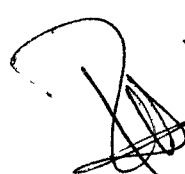
Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-00999-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Héctor Strubar Torrado Picón
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Departamento Norte
de Santander

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

 X traslado
18208
Dic. 11/2017



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)


Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-00869-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Aurora Buitrago Cantor
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Departamento Norte de Santander

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMÉD VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO


x traslado
Nº 208
Dic 11/2017 #



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-01002-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Fanny Luz Parra Pérez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Departamento Norte
de Santander

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

Recebo
Nº 208.-
Dic. 11/2017



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-00867-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Ana Dolores Ortega Contreras
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Departamento Norte
de Santander

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROBIEL AMÉD VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

X Estado
Nº 208
Dic 11/2017



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

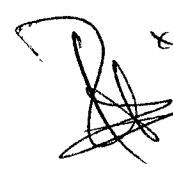
Ref. Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-00927-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Jesús Alberto López Ramírez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Departamento Norte de Santander

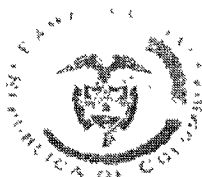
Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMÉD VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

 x estado
Nº 208
Dic. 11/2017.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)


Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-00998-01
 Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
 Accionante: Miriam del Carmen García Celis
 Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Departamento Norte de Santander

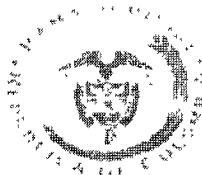
Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO


 Xc estado
 N° 208
 Dic-11/2017



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-00873-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Nelly Cecilia Ortiz Manosalva
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Departamento Norte
de Santander

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

Recebo
Nº 208
Dic. 11/2017



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER


San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)


Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-**2014-00921**-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Nancy Amparo Contreras Santos
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Departamento Norte de Santander

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

 X Estado
Nº 208
Dic. 11/2017



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)


Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-00874-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: Nora Yolanda Rangel Prada
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Departamento Norte de Santander

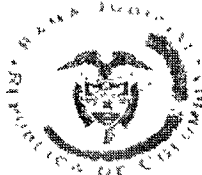
Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

 XESTADO
Nº 208
Dic. 11/2017 P



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

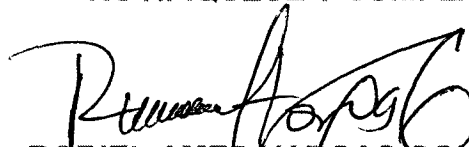
San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)


Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-2014-00982-01
Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Accionante: María Marlency Pérez Amaya
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Departamento Norte de Santander

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

 x estado
Nº 208
Dic. 11/2017 *



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, cinco (05) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)

Ref: Proceso Rad: 54-001-33-33-005-**2014-00986**-01
 Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
 Accionante: María Concepción Gelvis Galvis
 Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Departamento Norte de Santander

Visto el informe secretarial que antecede, y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a **CORRER TRASLADO** por el termino de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos.

De igual manera, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta el traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos, por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO

X Esrad
 N° 208
 Dic. 11/2017